



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
- SECCIÓN SEGUNDA
Expediente No.: 11001 33 35 010 2022 00185 00

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA

EXPEDIENTE No.: 11001 33 35 010 2022-00185-00.
ACCIONANTE: EDINS KERWIN MORALES ORTEGA
ACCIONADO: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
POLICIA NACIONAL.
CLASE: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Acorde con lo previsto por el inciso cuarto del artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, procede el Despacho a decidir la **solicitud de medida cautelar** presentada por la parte accionante, previas las siguientes consideraciones:

1. ANTECEDENTES

1.1. El demandante **EDINS KERWIN MORALES ORTEGA** a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, formuló demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, tendiente a obtener la nulidad de la **Resolución No. 04504 de 23 de diciembre de 2021**, a través de la cual la entidad accionada lo retiró del servicio activo de la Policía Nacional.

A título de restablecimiento del derecho solicitó el reintegro al cargo que venía desempeñando u otro equivalente, sin solución de continuidad, junto con el pago de los salarios y prestaciones insolutos, debidamente actualizados.

1.2. Dentro del escrito de demanda, la parte actora solicitó la **SUSPENSION PROVISIONAL DE LOS EFECTOS DE LA RESOLUCION No. 04504 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, PROFERIDA POR LA POLICÍA NACIONAL**”.

En síntesis, arguyó que al momento de ser propuesto para retiro por voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional, al demandante le hacían falta dos (2) años para completar los 20 de servicio que le permitían acceder al reconocimiento y pago de los tres meses de alta por parte de la **Policía Nacional** y la asignación de retiro mensual por parte de la **Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional “CASUR”**, situación jurídica que lo hacía merecedor de ser sujeto de protección laboral reforzada al encontrarse inmerso en la causal de “PRE-PENSIONADOS”, por ende se concreta una relación de dependencia intrínseca entre la permanencia en el empleo público y la garantía de sus derechos fundamentales, particularmente el mínimo vital, la seguridad social y la igualdad de oportunidades.

Respecto de los derechos fundamentales a la dignidad humana, el mínimo vital y la seguridad social, señala que se ven afectados ya que con el retiro del servicio activo, la entidad accionada sumerge al actor al empleo informal para poder suplir con las necesidades básicas y obligaciones crediticias tales como la cuota alimentaria de su menor hijo de 15 años, un crédito con la Cooperativa Nacional Santa fe y un embargo dentro de un proceso que cursa en el juzgado 16 Civil Municipal de Descongestión de Bogotá y de igual manera lo han sometido a una situación dramática de índole psicológico, derivada de un hecho injustificado, inminente y grave.



2. TRÁMITE IMPARTIDO

El Despacho a través de providencia de **30 de junio de 2022**, admitió la demanda formulada por **EDINS KERWIN MORALES ORTEGA**, y ordenó la notificación de la demandada **NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL** y en la misma data en providencia aparte se ordenó correr traslado de la medida cautelar a la parte pasiva.

Dentro del trámite de traslado de la medida cautelar, el apoderado de la demandada se pronunció sobre la solicitud de suspensión provisional.

En primer lugar, argumenta que el demandante en su solicitud no cumple los requisitos mínimos para decretar las medidas cautelares; puesto que no evidencia en su escrito de solicitud de suspensión el contenido mínimo de una solicitud de Medida Cautelar de acuerdo con el artículo 230 y 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Estima que la **Resolución Número 04504 del 23 de diciembre de 2021**, por medio de la cual se ejecutó la decisión por la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes, suscrito por el señor Director General de la Policía Nacional, es un acto administrativo de Ejecución expedido acatando estrictamente las normas y procedimientos legales que regulan este tipo de retiro, situaciones legales que no han sido desvirtuadas por la parte demandante y gozan de presunción de legalidad.

Determina que la facultad de retirar al personal del Nivel Ejecutivo y Agentes del servicio activo de la Policía Nacional, por la causal denominada “VOLUNTAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL”, se realiza dentro del ejercicio de las potestades legales de su función y en procura de cumplir la misión Constitucional otorgada a la Institución.

Trae a colación la motivación del **ACTA No. 005-APROP-GRUNE-3.22 del 8 de diciembre del 2021**, resaltando que el retiro del servicio activo por voluntad del Gobierno Nacional o del Director General de la Policía Nacional, no es producto de una sanción disciplinaria, sino una facultad consagrada en el Decreto Ley 1791 de 2000, que obedece a las razones del servicio con el fin de garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, la misma seguridad del Estado y el buen funcionamiento de la institución policial.

Asevera que el demandante como funcionario público al servicio del Estado en la Policía Nacional, con sus comportamientos y actuaciones incumplió sus deberes y obligaciones constitucionales y legales.

Finalmente, después de un desarrollo jurisprudencial que robustece la decisión de retirar del servicio activo a un integrante de la Policía Nacional, concluye que el acto acá demandado se sustenta en los requisitos de proporcionalidad y razonabilidad, que se expresan en la concordancia y coherencia entre acto discrecional y la finalidad perseguida por la Institución; esto es, el mejoramiento del servicio.

3. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

3.1. Para efectos de resolver la solicitud de medida cautelar elevada por la entidad demandante, sea lo primero recordar que de acuerdo con lo dispuesto en el inciso



primero del artículo **229 de la Ley 1437 de 2011**, en todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, el Juez o Magistrado Ponente, a petición de parte podrá decretar las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

Por su parte, el artículo **230** de la misma ley establece que las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deben tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, por lo tanto, se podrán decretar cualquiera de las medidas allí señaladas, entre las cuales, se encuentra la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo.

Además, el artículo **231** ibídem establece que cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento de un derecho y la indemnización de perjuicios, se deberá probar al menos sumariamente la existencia de los mismos.

3.2. Descendiendo al caso concreto, se observa que la parte demandante pretende la nulidad de la **Resolución Número 04504 del 23 de diciembre de 2021**, a través de la cual la entidad accionada lo retiro del servicio activo de la Policía Nacional; y a título de restablecimiento del derecho solicita se ordene a la Policía Nacional el reintegro al servicio activo, al cargo que venía desempeñando o a otro equivalente, pero de funciones afines a las que desempeñaba, sin que se entienda que existió solución de continuidad y se le reconozca y pague todos los sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y de más emolumentos dejados de percibir desde el día de su retiro del servicio activo hasta cuando sea reintegrado efectivamente, incluyendo el valor de los aumentos que se hubieren decretado.

Analizada la argumentación presentada por la parte demandante para proceder al decreto la suspensión provisional, el Despacho la considera insuficiente para disponer de tal medida en este estadio procesal. En efecto, el Juzgado no evidencia que con la expedición de la resolución acusada se hayan violado de manera palmaria de las normas de rango superior que en el petitorio se citan—artículos 2, 4, 6, 13, 21, 25, 29, 48 y 83 de la Constitución Política—, tal como lo intenta en principio demostrar el demandante con la solicitud de suspensión provisional.

Si bien es cierto la parte actora alegó la condición de pre pensionado del retirado para que la medida cautelar resulte procedente, lo cierto es que en este estadio del proceso no es posible dilucidar, con total claridad, que la facultad discrecional con la que cuenta el Director General de la Policía Nacional para disponer el retiro de los patrulleros, previa recomendación de la junta respectiva, se vea limitada u obstaculizada por la condición de pre pensionado del demandante como patrullero de la Policía Nacional. Dicha tesis, a juicio del Despacho, amerita una discusión normativa y jurisprudencial profunda que no resulta propia en este estadio del proceso.

Una vez revisadas las piezas procesales dentro del presente proceso, encuentra el Despacho que la parte actora si bien alegó que con ocasión de los efectos producidos por la expedición del acto de retiro se encuentra imposibilitado para vincularse laboralmente, afectándole con ello, entre otros, el sustento de sus



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
- SECCIÓN SEGUNDA
Expediente No.: 11001 33 35 010 2022 00185 00

necesidades básicas, no es menos cierto que la solicitud se encuentra desprovista de los respectivos soportes con el propósito de poder efectuar el estudio correspondiente y, así, poder determinar que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

De igual manera, se itera, no existen elementos de orden fáctico que lleven a concluir una posible afectación de las normas sobre las cuales se funda el acto acusado y por contera una violación de los intereses públicos invocado como fundamento de la medida cautelar. Tampoco existe un riesgo de que, al no adoptarse la medida cautelar, sobrevenga un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda que, de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo.

3.3. Por consiguiente, el Despacho no accederá al decreto de la medida cautelar por cuanto es necesario evaluar la situación concreta que conllevó al retiro efectivo del servicio activo de la Policía Nacional con fundamento en jurisprudencia, normas y las pruebas que legal y oportunamente se logre recaudar, valorándolas en la etapa procesal correspondiente.

En razón a lo anterior, este Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de suspensión provisional de la **Resolución Número 04504 del 23 de diciembre de 2021**, presentada por la parte accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Una vez en firme la presente decisión, ingrese de nuevo el expediente al Despacho, para continuar con el trámite procesal que corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

**AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ**

Jado

4

Firmado Por:
Augusto Llanos Ruiz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
010
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 95199c99502923503a361dce5a912dc1a4c983d1eda8cb37a40054c99a581885

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>